

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310502120190014201
Proceso:	Ordinario
Demandante:	NORA IMELDA MAYA MAYA
Demandado:	EPM S.A. ESP, PROTECCIÓN S.A., AFP PORVENIR S.A.
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	05 DE AGOSTO DE 2022
Decisión:	CONFIRMA. MODIFICA, ADICIONA Y REVOCA PARCIALMENTE

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 08 DE AGOSTO DE 2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cinco (05) de agosto de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	NORA IMELDA MAYA MAYA
DEMANDADAS	COLPENSIONES, PROTECCIÓN y PORVENIR S. A
ORIGEN	Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-021-2019-00142-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por NORA IMELDA MAYA MAYA contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.

Atendiendo al poder remitido vía correo electrónico el 15 de diciembre de 2021¹, suscrito por Fabio Andrés Vallejo Chanci en calidad de representante legal de la firma Palacio Consultores S.A.S., se reconoce personería al abogado Juan Pablo Sánchez Castro con CC 1.128.391.508 y portador de la TP 199.062 del C.S. de la J. para representar como mandatario sustituto, los intereses de Colpensiones.

Adicionalmente, en virtud del poder remitido vía correo electrónico el 21 de julio de 2022², se reconoce personería para representar los intereses de PORVENIR S.A. a la abogada María Alejandra Ramírez Olea, identificada con CC 1.152.225.557 y T.P N°359.508 del C.S. de la J, quien funge como apoderada inscrita en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Godoy Córdoba Abogados S.A.S., identificada con NIT 830515294-0 a quien le fue conferido poder a través de escritura pública N°1323 del 11 de mayo de 2022 de la Notaría 18 del Círculo de Bogotá.

¹Carpeta 02SegundaInstancia, archivo 02SustitucionColpensiones.pdf

² Carpeta 02SegundaInstancia, archivo 05AlegatosPorvenir.pdf

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda³

La señora Nora Imelda Maya Maya formula demanda contra Colpensiones, Protección S.A., y Porvenir S.A., pretendiendo se declare: **i)** la ineficacia de su afiliación al RAIS administrado por Porvenir S.A. efectuado el 1° de julio de 1995 y en consecuencia de lo anterior se ordene **ii)** el traslado automático de la demandante al RPM administrado por Colpensiones desde el 1° de julio de 1995, junto con la totalidad de lo ahorrado en su cuenta de ahorro individual con sus rendimientos hasta la fecha.

Fundamentó sus pretensiones en que en el mes de julio de 1995, se afilío al RAIS a través de ING Pensiones y cesantías fusionada con Protección S.A., luego sin interrupción, se trasladó a Colmena que fue fusionada con Pensiones Santander y hoy se encuentra afiliada a Porvenir S.A., en la cual se encuentra vinculada desde el 1° de julio de 2002, sin que a la suscripción de dichos actos le fuera brindada por un asesor una información clara y entendible al trabajador sobre el sistema íntegro del RPM y el RAIS que le permitiera valorar las consecuencias de su afiliación, por lo que se configuró un error de hecho en el consentimiento de la demandante. Solicitó traslado pensional a Colpensiones, el cual fue negado por la entidad aduciendo encontrarse fuera del término señalado para ello.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

i) Colpensiones⁴

La actora no cumple con los requisitos estudiados por la jurisprudencia laboral para determinar la viabilidad de la nulidad o ineficacia del traslado. Excepcionó: inexistencia de la obligación, prescripción, imposibilidad de condena en costas, buena fe y excepción innominada.

ii) Porvenir S.A.⁵

La afiliación tiene plena validez, toda vez que no se configuró vicio en el consentimiento, teniendo en cuenta que la demandante de forma autónoma y mediando un consentimiento exento de vicios, por lo que se trata de una vinculación consolidada por decisión voluntaria de la accionante y validada por el transcurso del tiempo. Adicionalmente indica que, la demandante no reúne los requisitos para el traslado de régimen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 979 de 2003. Finalmente aduce que Porvenir S.A. agotó todos los requisitos legales que para la época de la afiliación le era exigible. Excepcionó: prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción de obligaciones laborales de tracto sucesivo, enriquecimiento sin causa, innominada o genérica.

³ Carpeta 01Primera Instancia; Archivo 01Demanda.pdf

⁴ Carpeta 01PrimeraInstancia; Archivo 08ContestacionColpensiones.pdf, Págs. 1/6

⁵ Carpeta 01PrimeraInstancia; Archivo 12ContestacionPorvenir.pdf, Págs. 1/16

iii) Protección S.A.⁶

El acto de afiliación existe, es válido y exento de vicios, se realizó atendiendo los lineamientos legales vigentes para la época en que se suscribió el formulario de afiliación, donde la afiliada manifestó su voluntad de pertenecer al RAIS al plasmar allí su firma, generando derechos y obligaciones para ambas partes; dicho traslado se hizo en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, respetando el derecho a la libre elección de régimen consagrado en los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993 a través de la firma del formulario de afiliación en señal de aceptación. Así las cosas, la parte actora no puede pretender la declaratoria de una ineficacia y/o nulidad soportando dicha pretensión en sus expectativas económicas respecto del valor de la mesada por vejez, toda vez, que un acto es nulo por vicios en el consentimiento no por la favorabilidad económica de un acto jurídico.

Excepcionó: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: Inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, innominada o genérica.

Sentencia de primera instancia⁷

El 27 de agosto de 2021, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia declarando la ineficacia del traslado que realizó la demandante hacia al RAIS y que su afiliación a Colpensiones ha sido sin solución de continuidad. Ordenó a Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones, y a ésta a recibir, los saldos de la cuenta de ahorro individual, incluidos rendimientos financieros. Condenó a Protección S.A. a trasladar a Colpensiones las cuotas de administración y sumas del seguro previsional, descontados durante el tiempo que la actora estuvo afiliada al RAIS, incluyendo los tiempos de afiliación con otras AFP. Declaró probada la excepción de ausencia del vicio en el consentimiento. Condenó en costas a Protección S.A., fijando agencias en derecho en la suma equivalente a 1 SMLMV en favor de la demandante.

El juez de primera instancia advirtió el precedente judicial vigente en la materia y señaló que a Protección S.A., le correspondía demostrar el cumplimiento de su deber de información antes de la suscripción del formulario de afiliación, carga probatoria que no satisfizo con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, declarando en consecuencia la ineficacia de traslado de régimen pensional, amparado en el artículo 272 de la Ley 100 de 1993, en tanto el monto de la pensión de vejez en el RAIS sería muy inferior al que podría ofrecerle el RPM, lo cual atenta contra la dignidad humana y los derechos de los trabajadores.

⁶ Carpeta 01PrimeraInstancia; Archivo 21ContestacionProteccion.pdf, Págs. 1/19

⁷ Carpeta01PrimeraInstancia; archivo 29ActaPrimeraTramiteFallo.pdf

Recurso de apelación:

i) Protección S.A. Inconforme parcialmente con lo decidido en sentencia formuló recurso de apelación deprecando se revoque el numeral tercero de la providencia. Argumenta que, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia emanada por la Corte Suprema de Justicia, el efecto que se persigue en estos casos, es propiamente la declaración de la ineficacia y en consecuencia reconocer que este acto ha sido inexistente y por ende, así mismo han sido inexistentes todas las consecuencias que de él se han derivado. Indica que, debe tenerse en cuenta que la demandante ya no se encuentra vinculada a Protección S.A. y en consecuencia esta AFP trasladó con destino a Horizonte todas las sumas de dinero consignadas en su cuenta de ahorro individual. Reitera que la función administrativa de Protección S.A. fue eficiente, juiciosa y de ello dan cuenta los rendimientos que se generaron en la cuenta de ahorro individual de la actora, los cuales fueron trasladados a Porvenir S.A. e indica que, entregar estos dineros a Colpensiones generaría un enriquecimiento sin causa, por ser descuentos que se hicieron conforme a la ley.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Solo la parte demandante y la apoderada de Colpensiones, recorrieron oportunamente el traslado otorgado para alegar en esta sede, así:

El apoderado de la **demandante**⁸, solicita se confirme la sentencia de primera instancia, que hace relación a la declaratoria de “ineficacia” de la afiliación hecha por la demandante Nora Imelda Maya Maya del sistema de ahorro individual con solidaridad administrado hoy por “Porvenir”, con las consecuencias que correspondientes a la decisión esto es, entender la afiliación de la demandante, sin solución de continuidad, a Colpensiones” así como el traslado a ésta de la totalidad de sus aportes con sus rendimientos, y el pago de las costas señaladas.

Por su parte **Porvenir S.A.**⁹, solicita no se condene a la AFP a trasladar los dineros descontados por gastos de administración, dado que por mandato legal tienen una destinación específica que, se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, distribuido así el 10% del IBC a la cuenta de ahorro individual, el 0,5% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS, y el 3% restante a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes. En el presente caso, sostiene que dichos descuentos, han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, pues se han destinado a cubrir los gastos en que se incurrió, y para la generación de frutos o rendimientos que hoy se ven de manera positiva en la cuenta de la afiliada y el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte que se han venido amparando hasta la actualidad y que no pueden retrotraerse pues la cobertura y el servicio ya se ha prestado y este último no es posible devolverlo o retrotraerlo por parte del afiliado. Por si lo anterior, se recuerda que la inversión de dichos gastos de administración en seguros previsionales y en la generación de rendimientos, no se dio de manera antojadiza, sino de acuerdo con el mandato legal establecido en el artículo 20 de la ley 100 de 1993 y a la obligatoriedad

⁸ 02SegundaInstancia, archivo 04AlegatosDemandante.pdf

⁹ 02SegundaInstancia, archivo 05AlegatosPorvenir.pdf

de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el literal e) del artículo 60 de la ley 100 de 1993.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS; de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones.

Lo anterior, dado que el fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda es el incumplimiento del deber legal de información por parte de las administradoras, lo que al tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

Nora Imelda Maya Maya nació el 25 de noviembre de 1960¹⁰. El 29 de junio de 1995 se afilió a Cesantías y Pensiones Colmena -hoy Protección S.A.-¹¹, el cual se hizo efectivo en la misma fecha de suscripción del formulario de afiliación¹². que entiende esta Sala como selección inicial de régimen pensional, pues con anterioridad a esa fecha no se registran afiliaciones, ni cotizaciones a través de otro empleador, y así consta en el respectivo formulario. A partir del 1 de abril de 2000 se presentó cesión por fusión a ING. Luego, el 31 de mayo de 2002 se trasladó a Horizonte Pensiones y Cesantías, efectivo a partir del 1° de julio de 2002¹³, este fondo fue cedido por fusión a Porvenir S.A. desde 1 de enero de 2014- donde todavía se encuentra afiliada.¹⁴ Para el 21 de diciembre de 2018 contaba con 1.198 semanas cotizadas en toda su vida laboral¹⁵. El 12 de septiembre de 2018¹⁶, Colpensiones negó solicitud de traslado de régimen de la demandante, por encontrarse a menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez.

¹⁰ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 02AnexosDemanda.pdf, Pág. 1. No se aportó registro civil de nacimiento, pero sí copia de la cédula de ciudadanía de la demandante, que suministra esa información, no controvertida por la pasiva.

¹¹ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 21ContestacionProtección.pdf, Págs. 44/45

¹² Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 21ContestacionProtección.pdf, Pág. 42

¹³ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 12ContestacionPorvenir.pdf, Pág. 18

¹⁴ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 12ContestacionPorvenir.pdf, Pág. 17

¹⁵ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 12ContestacionPorvenir.pdf, Pág. 36

¹⁶ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 02AnexosDemanda.pdf, Pág. 13

a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS.

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte de la demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

- i) Los artículos 48, 53, 335¹⁷ y demás normas concordantes de la Constitución Política;
- ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1¹⁸, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994¹⁹; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, que contiene prohibiciones expresas²⁰ para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994²¹.

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el **numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de “suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen”**. No pudiéndose predicar como

¹⁷ Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, debido a la función que desempeñan.

¹⁸ Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

¹⁹ Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

²⁰ **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

²¹ Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP, respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, solo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría, y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir

requisitos para pensionarse, “*dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.*”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre, voluntaria e informada manifestación de voluntad del afiliado al momento del traslado o que debe desatenderse la línea jurisprudencial en materia de carga probatoria en asuntos como el que nos ocupa, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; debiendo atenderse al hecho de que **la escogencia del régimen pensional debe ser libre y espontánea**, so pena de sanción, como sostiene la SCL de la CSJ en sentencias como las SL 2324 de 2019, 373 Y 3871 de 2021, 800 Y 1695 de 2022, entre otras razones, por no haber estado precedido de la satisfacción del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó a la afiliada, quien, en este caso, al absolver el interrogatorio de parte expresó que el asesor le informó que en el fondo privado tendría mejores garantías y podría pensionarse anticipadamente, pero no las condiciones para obtener esos beneficios.

No son admisibles los argumentos expresados por Protección S.A., en cuanto sostiene que, la vinculación de la actora al RAIS obedeció a una decisión espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley, porque verdaderamente no se demostró que la selección de régimen se produjo con pleno conocimiento de lo que ello implicaba en el caso específico de la accionante; no bastando la sola afirmación de ese hecho, ni que la solicitud de vínculo inicial estuviera signada por ella, para concluir en que la AFP satisfizo, -como afirma-, el deber de información en los términos exigidos para entonces; pues en dicho formato nada se indica sobre las condiciones de su afiliación al RAIS, ni las diferencias existentes con el RPMPD, como tampoco la forma en que se liquida la pensión de vejez en uno y otro, ni sobre el requisito de capital mínimo acceder a pensionarse, entre otra información determinante para que la potencial afiliada pudiera adoptar una decisión consciente, libre y más conveniente en materia pensional, derecho de rango fundamental según el artículo 48 de la Carta Política, y la jurisprudencia.

De ahí que, la aportación del formulario de afiliación al RAIS no exime, ni avala la omisión de los deberes impuestos por las leyes a las AFP, pues se reitera, que previo a la suscripción de ese documento, tales entidades deben en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones de la afiliación o traslado, como se infiere del precedente emanado de la CSJ en SCL.

Tampoco son exoneradoras de responsabilidad la alegada difusión de campañas masivas para educar al consumidor financiero y ni comunicados de prensa allegados informando los cambios normativos, dicha documental por sí misma no acredita el cumplimiento por parte de la Administradora de su deber de información frente a la afiliado, y menos aún con la claridad que debía ofrecerse respecto del caso particular de la accionante, de ahí que tales publicaciones no demuestran que efectivamente la AFP Protección, o la entidad a ella fusionada, cumplió con el deber de información e ilustración suficiente.

Menos aún puede acogerse que el deber de información sólo fue obligatorio desde la expedición de la Circular 016 de 2016, o que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación surgieron sólo en 2010 y 2014, dado que por el contrario, se encuentra decantado que estando a cargo de la AFP previa a la afiliación o traslado aquel se origina a partir de la creación misma del régimen pensional, de ilustrar suficientemente al potencial afiliado sobre las condiciones de ambos regímenes, su funcionamiento y expectativas, de manera que cada persona adopte una decisión informada y consciente sobre su futuro pensional, como se infiere de las normas anteriormente relacionadas.

Sobre la carga dinámica de la prueba, ha de indicarse que ésta radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sublite, mediante la prueba documental arribada, se evidencia que Nora Imelda Maya Maya nació el 25 de noviembre de 1960²², por lo que, al 01 de abril 1994, cuando inició vigencia el SGSSP para ella, tenía 33 años, y no reunía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, por ende, nunca fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 29 de junio de 1995 suscribió traslado con destino a Cesantías y Pensiones Colmena –fusionada con ING Pensiones y Cesantías, -hoy Protección S.A.-²³, el cual se acusa de ineficaz. Posteriormente, el 31 de mayo de 2002 se trasladó a Horizonte Pensiones y Cesantías -hoy Porvenir S.A.-²⁴. El 12 de septiembre de 2018²⁵, Colpensiones negó solicitud de traslado de régimen de la demandante, por encontrarse a menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez.

²² Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 02AnexosDemanda.pdf, Pág. 1. No se aportó registro civil de nacimiento, pero sí copia de la cédula de ciudadanía de la demandante, que suministra esa información, no controvertida por la pasiva.

²³ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 21ContestacionProtección.pdf, Págs. 44/45

²⁴ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 12ContestacionPorvenir.pdf, Pág. 17

²⁵ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 02AnexosDemanda.pdf, Pág. 13

Igualmente fue recaudado interrogatorio a la demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su traslado hacia el RAIS, manifestó que se trasladó a Protección S.A. con ocasión a una visita que tuvieron en su lugar de trabajo de asesores de la AFP, los cuales les brindaron una asesoría donde les informaron que el ISS se iba a terminar y que en el fondo privado podría pensionarse anticipadamente, más no les hablaron sobre la heredabilidad de la pensión, ni sobre la posibilidad de generar rendimientos, por lo que se sintió engañada. Frente a su traslado a Porvenir S.A. indicó que no sabe cómo sucedió, que cuando se acaba un fondo privado, automáticamente los trasladaban a otro.

Protección S.A. no aportó elemento de convicción sobre cuál fue la asesoría que dice haber brindado a la señora Maya Maya, en momento anterior a la suscripción del formulario de afiliación; y siendo esa AFP encargada de tramitar la vinculación al RAIS, estaba llamada a demostrar que no se vio afectada en su eficacia por haberle suministrado la información suficiente, clara, completa a su potencial afiliada, sin embargo no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en el posible afiliado, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Adicionalmente, deviene innecesario analizar las condiciones de afiliación a Porvenir S.A., pues la ineficacia del traslado de régimen afecta toda migración posterior entre administradoras.

De ello no hay elementos de convicción en el plenario distintos del formulario de afiliación en ésta, sobre el cual la AFP Protección S.A. adujo que, estando suscrito por la demandante, de quien predica, lo hizo de manera libre y voluntaria, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de examinar si deviene procedente o no declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo**

1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que los actos de la demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, no son indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de afiliación o traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar, pues** la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de afiliación o traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por las migraciones o traslados hacia administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199- 2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**²⁶, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Protección S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993²⁷ genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como repuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún

²⁶ por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral

²⁷ **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL4360 de 2019**, de donde se infiere que: la sanción impuesta en el artículo 271²⁸ de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto a la vinculación o al traslado, y, da lugar a garantizar el derecho del accionante a afiliarse o a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES y a declarar que ha permanecido afiliada, sin solución de continuidad.

Tales motivaciones permiten **confirmar** la sentencia conocida en apelación y consulta, en cuanto a la declaración de ineficacia de afiliación al RAIS que el fallador de instancia interpretó como ineficacia de traslado, pero que para el asunto que se ventila tiene idéntico origen y consecuencias.

b) Consecuencias económicas de la declaratoria de ineficacia

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del régimen de prima media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él, como ha dilucidado el precedente jurisprudencial de la H CSJ en SCL., que esta Sala acoge.

Bajo las referidas premisas, se **modificarán y adicionarán** las órdenes impartidas en primera instancia, ordenando a **PORVENIR S.A.**, AFP en la cual se encuentra afiliada la demandante, que dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que la hoy demandante figuró como afiliada al RAIS.

²⁸ El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud⁴¹ en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

Además se ordenará a Protección S.A. y Porvenir S.A., trasladar a la referida AFP del RPM, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras, por ellas descontadas durante el periodo de afiliación de la hoy demandante en cada una de ellas, y en las AFP que a éstas se fusionaron, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni, si el dinero de la afiliada fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia de la afiliación inicial al RAIS, y por no haberse estudiado previamente a ese vínculo la situación particular de la hoy demandante, y no estando demostrado que las AFP cumplieron con los deberes de información que sostienen haberle dado, no es pertinente exonerarlas de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero de la afiliada, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y la demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración de la accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuentemente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor de la hoy demandante, como anteriormente se explicó.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante las órdenes impartidas en la primera instancia que aquí se confirma.

PROTECCIÓN S.A. Y PORVENIR S.A., además deberá responder por la devolución de lo descontado por cuotas o gastos de administración durante el tiempo de afiliación de la demandante ante Colmena e ING Santander Pensiones y Cesantías, la primera, y por Horizonte S.A. la segunda, en **este aspecto se adiciona** la decisión de primera instancia, dado que, en virtud de la fusión presentada por esa AFP con las hoy demandadas, al celebrar el referido negocio jurídico, se subroga tanto en derecho, como en obligaciones respecto de sus afiliados, y debe protegerse el equilibrio financiero del RPM.

Pero, retomando el punto, y por las razones ya expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral²⁹ contenido en sentencias **SL 3202-2021**,

²⁹ Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Porvenir S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados a la demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes

SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por la AFP del RAIS durante el periodo de afiliación de hoy demandante en ella, se deben trasladar debidamente **indexadas** y con cargo a sus propios recursos, aspecto en el cual, **se adicionará la decisión de instancia**, con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

En consecuencia, las órdenes impartidas desde la primera instancia, se **CONFIRMARÁN, MODIFICARÁN Y ADICIONARÁN** como se dijo, y se reitera, deberán cumplirse dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con ambas AFPs del RAIS sin trasladar consecuencias negativas a la actora.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A. y PROTECCION S.A., los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el régimen de prima media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

En este sentido se **confirmará, modificará, adicionará** la sentencia conocida en apelación y consulta.

III. EXCEPCIONES

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae, atendiendo el hecho que tanto la recuperación del régimen de prima media, como la libertad de movilidad del sistema pensional, son derechos no sometidos al efecto extintivo del transcurso del tiempo, al tratarse de una condición inherente al derecho a la prestación del sistema de seguridad social en pensiones, la acción de ineficacia se encuentra revestida de la imprescriptibilidad que el artículo 48 de la Constitución Nacional imprime al derecho a la seguridad social, respecto del que se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en sentencia del 30 de abril de 2014, radicación 43892.

Finalmente, se tiene que el Juez A Quo declaró probada la excepción de ausencia de prueba del vicio del consentimiento, la cual debe **revocarse** porque la insuficiente

para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

asesoría sobre los puntos del tránsito de régimen es indicadora de que la decisión de suscripción de la afiliación al RAIS no estuvo precedida de la comprensión suficiente y menos aún del real consentimiento para adoptarla.

IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A por haber resultado vencida en su recurso. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2022, y en favor de la demandante. Lo anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la declaratoria de ineficacia del acto de vinculación de la señora **NORA IMELDA MAYA MAYA** al RAIS, contenida en sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín el 27 de agosto 2021, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por la referida persona contra COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. **modificándola y adicionándola** en el sentido de ordenar a esta última: trasladar a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, con destino a fondo del RPM **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante la totalidad del tiempo en que la referida demandante ha figurado como afiliada en el RAIS.

Además, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. trasladarán a Colpensiones los valores descontados a la actora por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima y con cargo a sus propios recursos, trasladarán debidamente indexados el valor de comisiones de administración y primas de seguros descontados en todo el tiempo en que dicha demandante figuró como afiliada en cada una de ellas, y ante Colmena, ING Santander Pensiones y Cesantías y Horizonte S.A. con que ellas se fusionaron.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de las demandadas del RAIS los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, e incorporar los respectivos aportes pensionales completos en la historia laboral de la demandante como si hubiera permanecido en el RPM.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la referida providencia, en cuanto declaró probada la excepción de *ausencia de prueba del vicio en el consentimiento*, conforme se razonó en la parte motiva.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de PROTECCION S.A. Agencias en derecho en el equivalente a medio (1/2) SMLMV en 2022.

Notifíquese lo resuelto por edicto.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARIA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
En ausencia justificada